

Reclamación nº 350/2018

Acuerdo de 8 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre el mantenimiento de la suspensión automática en relación con el expediente de contratación “Servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas y asilvestradas de Metro de Madrid, S.A.”, número de expediente: 6011800088.

Con fecha 29 de octubre de 2018 se ha recibido en este Tribunal escrito de don César Alejandro Fernández Fidalgo, en nombre y representación de Ilunion Limpieza y Medioambiente, S.A., formulando reclamación contra la adjudicación del contrato de servicios mencionado.

En la reclamación se solicita el mantenimiento de la suspensión automática *ex lege* de la adjudicación con el objeto de impedir que la reclamación pierda su finalidad legítima.

Según lo establecido en el artículo 104.6 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en adelante LCSE), la tramitación del expediente se encuentra suspendida.

El órgano de contratación en el informe preceptivo establecido en el artículo 105.2 LCSE se opone al mantenimiento de la suspensión solicitada.

El artículo 105.3 LCSE señala que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición de la reclamación, el órgano encargado de la resolución del recurso especial, decidirá sobre si procede o no el mantenimiento de la suspensión automática prevista en el artículo 104.3 LCSE, entendiéndose ésta vigente en tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento.



Dicho artículo es la traslación al derecho nacional del contenido de los considerandos 4 y 5 y el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE, de recursos (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE) en virtud de los cuales, la suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto de evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aún concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda



consolidar por la perfección del contrato. Con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación se evita que con la posible adjudicación del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al licitador propuesto como adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.

Ponderadas las circunstancias del caso y al no haberse acreditado que el mantenimiento de la suspensión suponga perjuicio para los intereses generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.3 LCSE, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Mantener la suspensión de la tramitación del expediente de contratación “Servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas y asilvestradas de Metro de Madrid, S.A.”, número de expediente: 6011800088, hasta que se resuelva la reclamación y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

